CUBA

La Constitución protege la libertad de culto; sin embargo, en la legislación y en la práctica, el gobierno impone restricciones a esa libertad.

El respeto a la libertad de culto en la legislación y en la práctica por parte del gobierno mejoró durante el período comprendido en el informe, si bien siguieron vigentes varias restricciones importantes. En su mayoría, los grupos religiosos siguieron declarando que tenían una mayor posibilidad de atraer a nuevos miembros, celebrar actividades religiosas y realizar proyectos de beneficencia y de servicio comunitario y, al mismo tiempo, notificaron que había menos restricciones a la expresión políticamente delicada, la importación de materiales religiosos y los viajes. Los grupos religiosos también declararon que era más fácil obtener permiso del gobierno para mantener y reparar los lugares de culto y otras edificaciones existentes, aunque seguía siendo difícil obtener permiso para la construcción de nuevas edificaciones. Algunos miembros de organizaciones religiosas, particularmente de iglesias sin reconocimiento oficial, declararon que el gobierno las acosaba por medio de vigilancia regular y detención esporádica, entre otras cosas. Un acontecimiento importante fue la invitación hecha por el gobierno al Cardenal Católico de Cuba, Jaime Ortega, a debatir sobre la liberación de presos políticos, que al finalizar el período comprendido en este informe había resultado en más de 40 excarcelaciones.

No se notificaron casos de abuso de la sociedad ni discriminación por motivos de afiliación, creencias o prácticas religiosas.

El Gobierno de los Estados Unidos exhortó a que se ejerciera presión internacional sobre el gobierno con el fin de promover la libertad de culto y otros derechos humanos.

Sección I. Demografía religiosa

El país tiene una superficie de 110.860 km² y 11,5 millones de habitantes. No había una fuente autorizada e independiente de información sobre el tamaño y la composición de las instituciones religiosas y sus feligreses. La Iglesia Católica Romana calcula que 60 a 70 por ciento de la población es católica. Se estima que la feligresía de las iglesias protestantes representa el 5 por ciento de la población, en la cual hay bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, adventistas del Séptimo Día, metodistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos e integrantes de la Sociedad

Religiosa de los Amigos (cuáqueros). También hay otros grupos como la Iglesia Ortodoxa Griega, la Iglesia Ortodoxa Rusa, musulmanes, judíos, budistas, bahaíes y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones).

Según algunas fuentes, se calcula que hasta 80 por ciento de la población consulta a profesantes de religiones que tienen raíces en África occidental y la cuenca del Río Congo, conocidas como Santería. Estas prácticas religiosas suelen entremezclarse con el Catolicismo y algunas de ellas exigen el bautismo católico para su plena iniciación, por lo cual es difícil calcular con precisión la feligresía total de estos grupos sincretistas.

El Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) es una organización general, oficialmente reconocida, integrada por 27 organizaciones religiosas en calidad de miembros plenos, ocho miembros asociados, dos observadores y 12 movimientos interconfesionales. El CIC está estructurado en seis “zonas” que abarcan todo el país. Según sus dirigentes, representa a más de 100.000 cristianos. Los miembros eligen a los dirigentes del CIC directamente. La afiliación al CIC es voluntaria y otros grupos reconocidos oficialmente, como la Iglesia Católica y las pequeñas colectividades judía y musulmana, no pertenecen a dicho Consejo.

Los dirigentes de la Iglesia Católica calcularon que el número de feligreses se situaba entre siete y ocho millones de personas, pero que solo de 4 a 5 por ciento de los católicos bautizados asistían a Misa regularmente, en tanto que el número de feligreses de las iglesias protestantes se calculó en alrededor de 600.000 a 800.000. Los bautistas, representados en cuatro convenciones, y las iglesias pentecostales, en particular, las Asambleas de Dios, tal vez sean las denominaciones protestantes más numerosas. Las Asambleas de Dios declararon que tenían más de 100.000 feligreses; los testigos de Jehová, unos 92.000 feligreses; los adventistas del Séptimo Día y los metodistas, unos 30.000 cada uno; los anglicanos, 22.000; los presbiterianos, 15.000; los cuáqueros, 300; y los mormones, 50. Los mormones se reúnen en La Habana en instalaciones que les alquila otra iglesia. La comunidad judía tiene algunos 1.500 miembros, 1.200 de los cuales residen en La Habana. En su mayoría, las iglesias protestantes notificaron un crecimiento continuo, que incluye un notable aumento del número de pentecostales.

Según la Liga Islámica, hay cerca de 6.000 a 8.000 musulmanes en el país, aunque solamente unos 1.000 son cubanos. El resto está constituido por extranjeros con residencia temporal, principalmente empresarios, estudiantes y diplomáticos. En 2007, el gobierno rechazó una oferta de donantes extranjeros para construir una

mezquita en La Habana, con la promesa de realizar el proyecto por cuenta propia; sin embargo, la construcción no había comenzado al finalizar el período comprendido en este informe.

Sección II. Situación de respeto del gobierno a la libertad de culto

Marco jurídico y normativo

Sírvase consultar el Apéndice C en los *Informes de país sobre prácticas de derechos humanos*, donde encontrará el estado de aceptación de las normas jurídicas internacionales por parte del gobierno.

<http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/appendices/index.htm>.

La Constitución protege la libertad de culto; sin embargo, en la legislación y en la práctica, el gobierno impone restricciones a esa libertad.

La Constitución de 1992 abolió el ateísmo como culto del Estado, declaró al país un estado laico y dispuso la separación de la Iglesia y el Estado. El gobierno no favorece oficialmente ningún credo ni iglesia en particular. El gobierno interactúa con los grupos religiosos principalmente por medio de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Esa Oficina es el punto de enlace oficial del gobierno con los grupos religiosos.

El gobierno exige que los grupos religiosos soliciten reconocimiento oficial al Ministerio de Justicia, sin lo cual no pueden funcionar legalmente. El procedimiento de solicitud exige que los grupos indiquen el lugar de sus actividades y su fuente de financiamiento. El Ministerio también debe certificar que esos grupos no dupliquen las actividades de una organización previamente reconocida. Una vez recibido, el reconocimiento oficial permite a los funcionarios eclesiásticos viajar al exterior, recibir a visitantes extranjeros y reunirse en lugares de culto autorizados. Los integrantes de grupos religiosos no reconocidos están sujetos a las mismas restricciones de viaje y de reunión que los demás ciudadanos. El gobierno raras veces obstaculizó las actividades de los grupos religiosos no reconocidos, pero sus reuniones fueron técnicamente ilegales y, por ende, estuvieron sujetas a la intervención del Estado. Aunque ni la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ni los testigos de Jehová tenían reconocimiento oficial, se les permitió realizar la mayoría de las actividades de los grupos religiosos reconocidos, incluso recibir visitantes extranjeros y enviar representantes al exterior.

El CIC no tiene ninguna función jurídica en el proceso de reconocimiento oficial; sin embargo, cumple una función asesora influyente al suministrar información y recomendaciones sobre los solicitantes al Ministerio de Justicia y a la Oficina de Asuntos Religiosos. Las nuevas denominaciones protestantes que desean comenzar a trabajar en el país a menudo buscan una iglesia establecida, que ya sea miembro del CIC, para que las patrocine y les ayude con los procedimientos de reconocimiento oficial y con el proceso de afiliación correspondiente.

El gobierno también exige que las iglesias reconocidas soliciten aprobación para cada lugar de reunión propuesto por medio de un proceso de inscripción separado. El gobierno permitió el uso de casas particulares para fines religiosos, método empleado por muchas organizaciones religiosas para evadir las estrictas restricciones impuestas a las nuevas edificaciones. Además de los numerosos reglamentos aplicados a todos los grupos religiosos, tales como la divulgación de información financiera, la asociación con cualquier organización extranjera y la inspección de bienes, publicaciones y registros de asistencia, las “casas templo” estuvieron sujetas a más reglas que limitaron el horario de culto y restringieron la ubicación permitida. Los cálculos del número total de casas templo, legales o no, variaron considerablemente de un poco menos de 2.000 hasta 10.000, en su mayoría no inscritas y, por lo tanto, ilegales. Muchos dirigentes religiosos informaron que solamente trataban de inscribir a un pequeño porcentaje de casas templo, por causa de la dificultad del proceso y la posibilidad de rechazo. Sin embargo, la gran mayoría de dirigentes religiosos informó que en las casas templo no inscritas se celebraban oficios sin mayor intervención del gobierno.

Aunque la ley permite construir templos nuevos, el gobierno rara vez concedió autorización. En su mayoría, varios dirigentes religiosos afirmaron que, durante el período comprendido en el informe, el gobierno frecuentemente expidió permisos para reparar o restaurar iglesias, lo cual permite realizar importantes obras de ampliación de algunas estructuras y, en algunos casos, construcción de edificaciones prácticamente nuevas en los cimientos de las antiguas. Durante dicho período, muchas iglesias realizaron ampliaciones o reparaciones.

La ley reconoció solamente al Partido Comunista y restringió la formación de cualquier otro partido, incluso de los fundados en creencias o doctrinas religiosas.

La ley exige el servicio militar de todos los hombres y no incluye ninguna disposición sobre las personas con objeciones de conciencia. Hasta 2007, el gobierno enjuició activamente y apresó a los hombres que se negaban a servir, incluso por razones religiosas. Desde entonces, en la práctica, ha permitido un

período de servicio público civil en sustitución del servicio militar para los hombres que expresan objeciones por motivos religiosos. Los líderes de los testigos de Jehová y los adventistas del Séptimo Día declararon que a sus feligreses generalmente les ofrecían la opción del servicio cívico.

Las publicaciones y otros materiales religiosos, por lo general, se importan por medio de un grupo religioso reconocido. La Oficina de Asuntos Religiosos concede las licencias para esa importación. Con pocas excepciones, el CIC importa y distribuye materiales religiosos impresos para todas las iglesias protestantes reconocidas.

Los grupos misioneros extranjeros funcionan por medio de las iglesias reconocidas. Las visitas de personalidades religiosas son examinadas por la Oficina de Asuntos Religiosos.

Para realizar procesiones u otros actos fuera de los edificios de culto, los grupos religiosos deben solicitar permiso al Ministerio de Justicia.

En general, los grupos religiosos informaron que no tuvieron problemas para la celebración de sus oficios. Muchas organizaciones religiosas informaron que habían tenido un gran aumento del número de feligreses y un repunte del interés en la religión, particularmente entre los jóvenes. Casi todas las iglesias declararon que tenían una mayor participación en las clases de religión para los niños porque las escuelas públicas ya no programaban actividades simultáneas los sábados o los domingos. Los líderes de los testigos de Jehová y los adventistas del Séptimo Día afirmaron que el maltrato y la discriminación laboral, que fueron particularmente severos en el pasado, eran raros ahora y se limitaban a casos aislados y que a sus miembros, por lo general, los eximían de actividades políticas en la escuela. Los líderes de los adventistas del Séptimo Día afirmaron que se solía excusar a sus miembros del trabajo los sábados. Según lo expresado por ambos grupos, disminuyeron la discriminación y el acoso.

Casi todos los grupos religiosos dijeron que había menos restricciones a las expresiones políticamente delicadas. En algunas parroquias católicas se rezó por los presos políticos y las autoridades eclesiásticas, incluso el Cardenal Ortega, criticaron abiertamente al gobierno en relación con algunos asuntos. Muchos dirigentes religiosos declararon que discutían en público sus interpretaciones bíblicas de cuestiones sociales, como la pobreza y la homosexualidad.

Los grupos religiosos ofrecieron clases de educación religiosa a sus feligreses y a un público más amplio. Se ofrecieron algunos cursos de posgrado de historia de la religión en la Universidad de La Habana, que es estatal. El gobierno permitió a algunos grupos religiosos, como la Iglesia Católica y el Centro Comunitario Judío de La Habana, administrar algunas instituciones de beneficencia y ofrecer cursos sobre temas no religiosos, tales como informática e idiomas. Las iglesias más grandes participaron cada vez más ofreciendo servicios a la comunidad, como asistencia a las personas de edad avanzada y un servicio de consultas telefónicas sobre el suicidio operado por la Primera Iglesia Presbiteriana de La Habana. Las operaciones internacionales de beneficencia confesionales, como la institución de beneficencia católica Cáritas y el Ejército de Salvación, tienen oficinas en La Habana.

Tanto la Iglesia Católica como el CIC notificaron que las autoridades, por lo general, concedieron acceso a los presos en las penitenciarías durante el período comprendido en el informe. En 2009, la Iglesia Católica y las iglesias afiliadas al CIC comenzaron a celebrar oficios regulares en determinadas cárceles, sobre todo en la provincia de La Habana. El CIC y la Iglesia Católica informaron que el gobierno permitió la continua expansión de este programa en 2010, con ofrecimiento de oficios en la mayoría de las provincias, si no en todas ellas. Como en el período precedente, hubo denuncias a efectos de que las autoridades penitenciarias no informaron a los presos de su derecho a asistencia religiosa, tardaron varios meses en responder a esas solicitudes y limitaron las visitas pastorales a un máximo de dos o tres al año.

El gobierno observa como feriado nacional el 25 de diciembre, día en el cual comúnmente se celebra la Navidad. En las declaraciones y los calendarios del gobierno no se asigna ninguna importancia religiosa a este día.

Restricciones a la libertad de culto

El respeto a la libertad de culto en la legislación y en la práctica por parte del gobierno mejoró durante el período comprendido en el informe, si bien siguieron vigentes restricciones importantes. Por lo general, los grupos más establecidos, así como los asociados al CIC, informaron que tenían una mayor posibilidad de realizar sus actividades sin intervención ni acoso del gobierno. A pesar de estos informes, no se exceptuó a los grupos religiosos en el empeño generalizado del gobierno por controlar todas las actividades cívicas, a menudo recurriendo a vigilancia, infiltración y acoso de quienes crearan sospechas de realizar actividades de oposición.

A principios del año un asistente a una conferencia filmó un video clandestino de un discurso de Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos, el cual se publicó posteriormente en Internet. En el discurso, Diego afirmó que el gobierno confiscó casas y lugares de culto a los líderes de varios movimientos religiosos no inscritos e incautó publicaciones religiosas que presuntamente “no ingresaron al país por los canales correctos”.

En la parte oriental del país, muchedumbres organizadas por el Estado acosaron a personalidades políticas de la oposición que iban rumbo a Misa. Muchedumbres organizadas por la policía y el gobierno continuaron acosando a la familia de Orlando Zapata Tamayo, preso político que murió en febrero después de una prolongada huelga de hambre. La madre de Zapata, Reina Luisa Tamayo, parientes y simpatizantes corearon consignas en contra del gobierno a medida que marchaban desde la casa hasta la iglesia cercana para asistir a Misa y visitar la tumba de Zapata. Las muchedumbres y la policía se reunieron en el recorrido, gritando insultos y coreando consignas a favor del gobierno y, en varias ocasiones, evitaron que Tamayo llegara a la iglesia.

Varios grupos religiosos consideraron que los reglamentos que rigen el establecimiento de las casas templo son extremadamente restrictivos y engorrosos. En su mayoría, los grupos indicaron que las solicitudes se aprobaban a la larga (aunque la espera podía ser de dos a tres años) o que no recibían ninguna respuesta, en tanto que una minoría afirmó que se habían denegado sus solicitudes. Por lo general, los grupos dijeron que seguían utilizando casas templo sin inscripción, con poca o sin ninguna intervención del gobierno.

La mayoría de los dirigentes religiosos declararon que ejercían la autocensura en sus predicaciones y discusiones durante los oficios. Aunque dijeron que había temores de que cualquier crítica directa o indirecta del gobierno ocasionara problemas con las autoridades de seguridad del Estado, casi ninguno pudo citar ejemplos concretos de intimidación o de acoso como consecuencia de sus predicaciones o afirmaciones. Algunos dirigentes religiosos destacados criticaron abiertamente al gobierno, entre ellos el Cardenal católico, cuyas críticas se divulgaron internamente en publicaciones católicas impresas y electrónicas, y un grupo de ancianos de la Santería cuya declaración recibió extensa cobertura en los medios de comunicación internacionales. Durante el período comprendido en el informe, varios dirigentes religiosos menos prominentes también criticaron ocasionalmente en público al gobierno. El gobierno no tomó represalias en ningún caso.

El gobierno alentó la movilización política en masa y favoreció a los ciudadanos que participaron activamente en actividades organizadas por el gobierno y en su apoyo. Los planes de estudio en todos los niveles de escolaridad fueron sumamente politizados. Como consecuencia, algunos grupos, como los testigos de Jehová tuvieron dificultades para dar cabida a sus prohibiciones contra la participación política en este ambiente. Por ejemplo, algunos dirigentes de los testigos de Jehová instaron a sus feligreses a evitar la educación universitaria. Asimismo, los grupos que se abstendían estrictamente de trabajar o estudiar el día sábado declararon que evitaban las profesiones que exigieran actividades sabatinas.

El gobierno reglamentó estrictamente la publicación de todos los materiales impresos (no solamente de las publicaciones religiosas), pero toleró una gama más amplia de medios electrónicos (algunos de los cuales censuró o filtró para impedir el acceso local). El gobierno ejerció un monopolio casi total de la distribución y venta de equipo y útiles de imprenta, que eran costosos. La Iglesia Católica y otras iglesias publicaron obras periódicas impresas durante el período comprendido en el informe sin intervención, aunque no tenían permiso para ello. La Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas también mantuvieron sitios web y blogs que no se censuraron.

El gobierno no permitió la existencia de escuelas primarias y secundarias particulares, como tampoco de escuelas religiosas, aunque varias escuelas internacionales de La Habana estaban en funcionamiento en virtud de acuerdos con el gobierno y tenían bastante libertad para establecer su plan de estudio. Sin embargo, el gobierno permitió que solamente los niños con pasaportes extranjeros asistieran a esas escuelas.

Abusos de la libertad de culto

No se recibieron informes de personas encarceladas o detenidas específicamente por motivos religiosos. Algunos grupos religiosos informaron de casos de feligreses que alegaban que el gobierno los había escogido para enjuiciamiento determinado por delitos comunes por causa de sus actividades religiosas. El CIC negó esa afirmación y declaró que no tenía noticia de ningún caso de encarcelamiento de ninguna persona por causa de creencias o actividades religiosas.

El 1° de febrero de 2010, el Tribunal Supremo Popular de La Habana afirmó la condena dictada contra el Pastor Omar Gude Pérez en 2009. Gude, líder de la

“Reforma Apostólica” (asociación de iglesias independientes no confesionales), fue condenado por actividad económica ilícita (por realización de transacciones comerciales en el mercado negro) y falsificación de documentos y cumplía una sentencia de seis años al final del período comprendido en el informe. Gude sostuvo que era inocente y afirmó que era objeto de persecución por sus actividades religiosas. En junio, la esposa de Gude declaró que se le expidió una orden de desalojo de la casa de la pareja como represalia por las actividades religiosas de su esposo. Al finalizar el período comprendido en este informe, el gobierno no había hecho cumplir la orden de desalojo. Los dirigentes del movimiento de Reforma Apostólica denunciaron acoso continuo y arrestos de dirigentes eclesiásticos en todo el país, con el encarcelamiento de al menos otro pastor a raíz de acusaciones de actividad económica ilícita.

Mejoras y avances del respeto de la libertad de culto

En términos generales, la mayoría de los grupos religiosos vio una continua mejora de su posibilidad de importar material religioso, recibir donaciones del exterior y viajar al exterior para asistir a conferencias y celebraciones religiosas. Para varios grupos religiosos fue más fácil traer trabajadores religiosos extranjeros, tener acceso a la Internet y restaurar los templos. En las afueras de La Habana, se concluyó en noviembre la construcción del nuevo seminario católico, el primero en más de 50 años. A su inauguración asistieron el Presidente Castro y varios otros funcionarios públicos.

El gobierno dejó en libertad a más de 40 prisioneros políticos durante el período comprendido en el informe, entre ellos muchos activistas reconocidos de los derechos humanos que habían sido arrestados en 2003. Si bien la mayoría fue liberada con la condición de que aceptara el exilio en España, durante el período comprendido en este informe el gobierno le permitió a uno de ellos permanecer en el país. Las excarcelaciones, mediadas por el Cardenal Jaime Ortega, se realizaron tras manifestaciones callejeras y graves críticas internacionales a raíz de la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo durante una huelga de hambre.

El gobierno siguió permitiendo la realización de procesiones públicas para importantes festividades católicas. El 8 de agosto la Iglesia Católica comenzó un recorrido procesional de una imagen por toda la isla en celebración de Nuestra Señora de la Caridad, designada por la Iglesia Católica como la santa patrona del país, en conmemoración de los 400 años de su aparición en Cuba. La procesión comenzó con una Misa, transmitida por la televisión nacional, con finalización

prevista para diciembre de 2011 con celebraciones en La Habana. Fue la primera procesión desde la revolución que abarcó todo el país.

Sección III. Situación del respeto de la sociedad a la libertad de culto

No se notificaron casos de abuso de la sociedad ni discriminación por motivos de afiliación, creencias o prácticas religiosas.

Sección IV. La política del Gobierno de los Estados Unidos

El Gobierno de los Estados Unidos exhortó a que se ejerciera presión internacional sobre el gobierno con el fin de promover la libertad de culto y otros derechos humanos. La política del Gobierno de los Estados Unidos hacia el país consiste en fomentar un mayor respeto por los derechos humanos, incluida la libertad de culto, y apoyar el deseo de sus ciudadanos de determinar libremente el futuro de su país. El Gobierno de los Estados Unidos alienta el desarrollo de la sociedad civil, que incluye el fortalecimiento de las instituciones religiosas. Los funcionarios de la Sección de Intereses de los Estados Unidos se reunieron con frecuencia con representantes de los grupos religiosos. Como en ocasiones anteriores, el Gobierno de los Estados Unidos colaboró con sus aliados en la comunidad internacional con el fin de presionar al gobierno para que ponga fin a sus prácticas represivas, entre ellas, el acoso y la vigilancia.